Artículo 28. Cuando los contribuyentes distintos de agricultores, ganaderos y comerciantes no lleven los libros a que se refiere el artículo 24 de esta Ley o no los lleven debidamente registrados y conforme a las disposiciones reglamentarias, o se nieguen a exhibirlos sin justa causa, incurrirán, de acuerdo con la gravedad de la infracción, en una sanción que en ningún caso será inferior a un mil pesos (\$ 1.000) ni superior al dos por ciento de su patrimonio bruto en el último día del respectivo período fiscal.

Esta sanción se impondrá en cada caso conforme a los grados y circunstancias que los reglamentos señalen y sin perjuicio de las sanciones por extemporaneidad e inexactitud y del desconocimiento de costos, deducciones de la renta bruta, o pasivos patrimoniales a que haya lugar.

Ganadería

Artículo 29. El artículo 79 del Decreto 1366 de 1967, quedará así:

Además del impuesto básico de renta determinado de acuerdo con el artículo 32 de la Ley 81 de 1960 y disposiciones que lo adicionan o reforman, los ganaderos deberán pagar a este mismo título cincuenta pesos por cada cabeza de ganado vacuno macho destinado al consumo interno o a la exportación y cien pesos cuando se trate de hembras.

Artículo 30. El artículo 81 del Decreto 1366 de 1967, quedará así:

Por cada cabeza de ganado vacuno macho mayor de un año que el contribuyente posea en el último día del ejercicio fiscal pagará como impuesto adicional al de renta, complementarios, recargos y especiales una cantidad equivalente al valor de cuatro kilos de carne de ganado en pie, de acuerdo con los precios promedios que el Ministerio de Agricultura fije para tal efecto al final de cada año gravable.

Artículo 31. Cuando el contribuyente demuestre haber omitido activos o relacionado pasivos inexistentes en años anteriores y no sea procedente la revisión oficiosa ni la multa que ésta pudiera ocasionar, se impondrá una sanción equivalente al tres por ciento del valor en que se haya disminuido fiscalmente el patrimonio, por cada año en que se compruebe la inexactitud, sin exceder del treinta por ciento.

No habrá lugar a imponer la sanción de que trata el artículo anterior al cónyuge que presente por primera vez declaración de renta y patrimonio, respecto de los bienes que se hubieren incluido en las presentadas anteriormente por el otro cónyuge. Para este efecto deberá acreditarse la propiedad de tales bienes.

Parágrafo. Deróganse los artículos 24 y 25 del Decreto 1366 de 1967.

Artículo 32. El artículo 17 del Decreto 1366 de 1967, quedará así:

Las pérdidas provenientes de los negocios de agricultura y ganadería no podrán deducirse de rentas originadas en actividades distintas, pero sí de las ganancias obtenidas en los mismos renglones durante los cinco años siguientes.

Parágrafo. Derógase el artículo 9º de la Ley 21 de 1963.

Artículo 33. A los trabajadores de empresas colombianas de transporte internacional, aéreo o marítimo que por razón del oficio, hubieren convenido individual o colectivamente, la remuneración en dólares, para efectos fiscales, les será computado el treinta por ciento de dicha remuneración a la par en moneda nacional.

Artículo 34. El original de la declaración de renta y patrimonio pagará una estampilla de diez pesos. En caso de presentación extemporánea de la declaración de renta y patrimonio se pagará una estampilla de veinte pesos.

Parágrafo. Deróganse los incisos 4º y 5º del artículo 3º de la Ley 24 de 1963.

Artículo 35. El artículo 30 del Decreto 1366 de 1967, quedará así:

Las entidades obligadas a hacer la retención de que tratan los artículos 28 y 29 del Decreto 1366 de 1967, deberán retener el cuarenta por ciento cuando la compañía extranjera beneficiaria no les demuestre que más del setenta y cinco por ciento del valor total de las acciones o derechos sociales en ella pertenece, directamente o a través de otras sociedades, a personas naturales extranjeras no residentes en Colombia.

De todas maneras se aplicará la retención del cuarenta por ciento sobre la parte proporcional que en los dividendos o participaciones recibidos por tales sociedades extranjeras corresponda, directamente o a través de otras sociedades, a socios o accionistas no identificados como personas naturales no residentes en Colombia.

Cuando en el país del domicilio de la sociedad beneficiaria de dividendos o participaciones originados en Colombia se gravan estas rentas con una tarifa no inferior a los dos tercios del impuesto de renta de las sociedades anónimas, de acuerdo con el artículo 57 de la Ley 81 de 1960 y se acredite este hecho, no será necesaria la identificación individual de los socios o accionistas personas naturales.

Si la compañía extranjera tiene sus acciones al portador y no se cumpla la condición señalada en el inciso anterior, la retención sobre los correspondientes dividendos se deberá hacer a la tarifa del cuarenta por ciento (40%).

Artículo 36. Los recursos de que trata el Decreto 1651 de 1961, interpuestos con el lleno de las formalidades legales durante los años de 1963 y anteriores, deberán resolverse dentro del plazo de doce meses, contados a partir del 1º de enero de 1968. Los interpuestos en 1964 y 1965 se resolverán antes del 31 de diciembre de 1969; los interpuestos en 1966 antes del 31 de diciembre de 1970, y los interpuestos a partir de 1967 deberán ser resueltos en el término de cuatro años, contados desde la fecha de su presentación. Si no se resolviera en dichos plazos se considerará que el recurso queda fallado en favor del contribuyente.

Artículo 37. En plantaciones de reforestación, se presume de derecho que el ochenta por ciento de la renta bruta obtenida en un determinado año de esa actividad es imputable al costo de producción de la venta y, por lo tanto, será deducible.

Parágrafo. Esta norma solo podrá aplicarse en el caso de que el contribuyente no haya solicitado, ni solicite, la deducción de los gastos e inversiones, ni de los intereses de las deudas contraídas para fines de reforestación.

Artículo 38. Los requisitos exigidos por el inciso 2º del artículo 46 de la Ley 81 de 1960, tal como fue modificado por el artículo 15 del Decreto 1366 de 1967, podrán suplirse o legalizarse con la comprobación satisfactoria que los respectivos reglamentos establezcan.

Artículo 39. Para que las personas naturales o jurídicas obligadas a percibir la cuota de fomento cerealista, de que trata el artículo 3º de la Ley 51 de 1966, puedan deducir las compras de cereales efectuadas por ella durante la respectiva vigencia fiscal, deberán acompañar a sus declaraciones de renta un certificado de la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales en el que conste que han percibido y entregado la cuota de fomento cerealista correspondiente al volumen de compras que ha realizado.

Vigencia

Artículo 40. Salvo disposición expresa en contrario, las disposiciones de esta Ley y las del Decreto 1366 de 1967 regirán a partir del año gravable de 1967.

Dada en Bogotá, D. E., a 14 de diciembre de 1967.

El Presidente del Senado,

GERMAN BULA HOYOS

El Presidente de la Cámara de Representantes,

JAIME SERRANO RUEDA

El Secretario del Senado,

Amaury Guerrero

El Secretario de la Cámara de Representantes,

Juan José Neira F.

República de Colombia. — Gobierno Nacional.

Bogotá, D. E., diciembre 26 de 1967.

Publíquese y ejecútase.

CARLOS LLERAS RESTREPO

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, Abdón Espinosa Valderrama.

El Ministro de Trabajo, Carlos Augusto Noriega.

LEY 64 DE 1967 (diciembre 27)

por la cual se crea el Fondo Vial Nacional y se destinan sus recursos para los planes viales nacionales.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1º Con el propósito de mejorar y extender la red de carreteras nacionales, conservar y mejorar las vías fluviales y realizar con mayor eficiencia la inversión en las mismas, créase el Fondo Vial Nacional con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, encargado de atender a los gastos que demanden el estudio, construcción, conservación y pavimentación de las carreteras nacionales, el estudio, conservación y mejoramiento de las vías fluviales y de auxiliar al Fondo Nacional de Caminos Vecinales.

Artículo 2º Forman parte del patrimonio del Fondo Vial Nacional:

a) Las sumas del Presupuesto Nacional que se apropien con destino a él, a otras carreteras y a obras hidráulicas.

b) Una suma equivalente al producto del impuesto a la gasolina y al ACPM a que se refiere el artículo 4º de esta Ley.

c) El producto del peaje.

d) El producto de las operaciones de crédito que se celebren de acuerdo con lo previsto en el artículo 6º de esta Ley.

e) El producto de la prestación de servicios y de la venta de los equipos, materiales y demás bienes de que trata el artículo 7º de esta Ley.

f) Los demás que se aporten al Fondo por entidades públicas y privadas o que adquiera a cualquier título.

Artículo 3º El proyecto de presupuesto del Fondo Vial Nacional, elaborado por el Ministerio de Obras Públicas con intervención del Departamento Administrativo de Planeación y aprobado por el Gobierno, será incluido como anexo al Presupuesto Nacional en la forma prevista por el artículo 3º del Decreto extraordinario 1675 de 1964.

Artículo 4º Con destino al Fondo Vial Nacional establecerse un impuesto, calculado con base en el precio por galón en refinería del ciento catorce por ciento (114%) para la gasolina y del cincuenta y cinco y medio por ciento (55½%) para el ACPM. Exceptúanse de este impuesto las gasolinas de aviación y el Diesel marino.

Parágrafo 1º La liquidación y recaudo del impuesto se hará por las refinerías y los importadores en el momento de efectuarse el despacho o entrega de los productos, pero los distribuidores mayoritarios tendrán un plazo hasta de treinta (30) días para el pago del valor correspondiente.

El reglamento establecerá la forma de hacer las deducciones por evaporación o pérdida de combustible.

Parágrafo 2º Del impuesto a que se refiere este artículo se destinará una suma no inferior al diez por ciento (10%) de su producto, como aporte al Fondo Nacional de Caminos Vecinales.

Los recursos nacionales del Fondo Nacional de Caminos Vecinales se asignarán a obras en los Departamentos y Territorios Nacionales, teniendo en cuenta:

a) Densidad de población;

b) Densidad vial referida a la población y a la superficie;

c) Recursos presupuestales propios de los Departamentos o Territorios Nacionales que destinen al programa de Caminos Vecinales;

d) Proyectos que presenten los Departamentos o Territorios Nacionales;

e) Beneficio económico y social resultante de la construcción del camino vecinal.

Estos criterios se aplicarán otorgando un mayor aporte nacional para aquellos Departamentos y Territorios cuya situación, de acuerdo a los numerales anteriores, sea comparativamente desventajosa.

El Gobierno adecuará la organización y funcionamiento del Fondo Nacional de Caminos Vecinales para la eficiente utilización de los recursos asignados, de acuerdo con este artículo.

Artículo 5º El Fondo Vial Nacional continuará pagando a la Corporación Financiera del Transporte las sumas que el Gobierno determine, con destino al subsidio de transporte urbano colectivo. Para este efecto incorporarse a la presente Ley, en cuanto sea pertinente, lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto legislativo 624 de 1966.

Parágrafo 1º La forma de administración, distribución, requisitos para el cobro, pago y términos de vigencia de este subsidio, serán determinados por el Gobierno Nacional.

Parágrafo 2º El Gobierno disminuirá hasta suprimirlo, en un término no mayor de tres años, el subsidio para el transporte urbano colectivo, a medida que sea posible establecer tarifas más costeables, sin afectar apreciablemente el costo de la vida.

Artículo 6º El Fondo Vial podrá contratar directamente empréstitos internos y externos para los programas de obras públicas, los cuales gozarán de la garantía del Estado otorgada previo concepto favorable del Consejo de Ministros.

Los contratos del Fondo de valor superior a dos millones de pesos (\$ 2.000.000.00) requerirán la aprobación del Presidente de la República y la ulterior revisión del Consejo de Estado.

Artículo 7º Autorízase al Ministerio de Obras Públicas para dar de baja y vender, conforme a los reglamentos correspondientes, todos los equipos y materiales de su propiedad que no requiera para el cumplimiento de sus objetivos y para incorporar su producto al Fondo Vial Nacional.

Artículo 8º El Ministerio de Obras Públicas, a través de sus dependencias, tendrá la administración del Fondo Vial Nacional. El Ministro de Obras Públicas será su representante legal y el Tesorero del Fondo será el Tesorero General de la República.

El Gobierno expedirá el reglamento de administración y manejo del Fondo Vial Nacional observando los principios de esta Ley y las disposiciones sobre establecimientos públicos que le sean aplicables.

El Fondo asumirá la administración de los contratos vigentes de obras públicas del Ministerio.

Artículo 9º La Junta Nacional del Fondo de Caminos Vecinales, de acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas, podrá adscribir las funciones de las oficinas seccionales del Fondo a las regionales del Ministerio, cuando la economía de gastos de administración lo aconseje y los reducidos volúmenes de trabajo lo justifiquen.

Los aportes de la Nación al Fondo de Caminos Vecinales, se harán por intermedio del Fondo Vial Nacional.

Artículo 10. La vigilancia fiscal del Fondo Vial Nacional se ejercerá por la Contraloría General de la República a través de la Auditoría del Ministerio de Obras Públicas. La Contraloría dictará un reglamento fiscal del Fondo, de acuerdo con la naturaleza de las operaciones del mismo y con el propósito de darle la debida agilidad administrativa.

Artículo 11. Continuarán vigentes indefinidamente los Decretos números 879 y 1148 de 1956 en la forma establecida en el artículo 13 de la Ley 15 de 1959, así como lo dispuesto en los artículos 2º, 3º y 4º del Decreto extraordinario 3289 de 1963.

Artículo 12. Esta Ley rige desde su sanción y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Dada en Bogotá, D. E., a 14 de diciembre de 1967.

El Presidente del Senado,

GERMAN BULA HOYOS

El Presidente de la Cámara de Representantes,

JAIME SERRANO RUEDA

El Secretario del Senado,

Amaury Guerrero

El Secretario de la Cámara de Representantes,

Juan José Neira Forero

República de Colombia. — Gobierno Nacional.

Bogotá, D. E., 27 de diciembre de 1967.

Publíquese y ejecútase.

CARLOS LLERAS RESTREPO

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Abdón Espinosa Valderrama

El Ministro de Obras Públicas,

Bernardo Garcés Córdoba

LEY 65 DE 1967 (diciembre 28)

por la cual se reviste al Presidente de la República de facultades extraordinarias para modificar la remuneración y régimen de prestaciones de las Fuerzas Militares, se provee al fortalecimiento de la administración fiscal, se dictan otras disposiciones relacionadas con el mejor aprovechamiento de las partidas presupuestales destinadas a gastos de funcionamiento y se crea una nueva Comisión Constitucional Permanente en las Cámaras Legislativas.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1º De conformidad con el numeral 12 del artículo 76 de la Constitución Nacional, revístese al Presidente de la República de facultades extraordinarias, por el término

de un año contado a partir de la vigencia de esta Ley, para los efectos siguientes:

a) Fijar tiempos mínimos en cada grado de los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional y dictar las normas para modernizar el régimen de carrera de este personal;

b) Fijar los sueldos básicos, primas y bonificaciones del personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, soldados, grumetes, agentes y personal civil al servicio de la Defensa Nacional;

c) Modificar el régimen de prestaciones sociales por retiro o fallecimiento de los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía, soldados, grumetes, agentes y personal civil al servicio del ramo de la Defensa Nacional;

d) Reorganizar las dependencias de la Presidencia de la República;

e) Reorganizar la administración fiscal con el objeto de capacitarla para evitar el fraude y cumplir en tiempo oportuno con sus funciones de liquidación y recaudación de los tributos y tasas nacionales, así como para resolver con prontitud las reclamaciones de los contribuyentes, también para reorganizar la administración de las aduanas a fin de hacerla más expedita y eficiente;

f) Reorganizar el Departamento Administrativo de Servicio Civil y la Comisión Nacional del Servicio Civil y señalarles sus funciones, a objeto de que puedan prestar al Gobierno, en asocio de la Secretaría de Organización e Inspección de la Administración Pública, la cooperación necesaria para el ejercicio de las facultades que contempla la presente Ley;

g) Modificar las normas que regulan la clasificación de los empleos, las condiciones que deben llenarse para poder ejercerlos, los cursos de adiestramiento y el régimen de nombramiento y ascensos dentro de las diferentes categorías, series y clases de empleos;

h) Fijar las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos nacionales, así como el régimen de prestaciones sociales;

i) Suprimir, fusionar y crear dependencias y empleos en la Rama Ejecutiva del Poder Público, y en los institutos y empresas oficiales y acordar autonomía o descentralizar el funcionamiento de oficinas de la Administración que así lo requieran para el mejor cumplimiento de sus fines;

j) Establecer las reglas generales a las cuales deben someterse los institutos y empresas oficiales en la creación de empleos y en el señalamiento de las asignaciones y prestaciones sociales de su personal y el régimen del servicio.

Artículo 2º El Gobierno procederá a contratar una comisión técnica para que revise el sistema tributario nacional y prepare proyectos de ley que regulen integralmente la materia con referencia a cada uno de los tributos existentes y los que se propongan para reemplazarlos total o parcialmente.

Artículo 3º Igualmente podrá el Gobierno contratar la asesoría técnica que considere indispensable para el estudio de las reformas administrativas que contempla la presente Ley.

Artículo 4º Autorízase al Gobierno para abrir los créditos y efectuar los traslados presupuestales necesarios para el cumplimiento de la presente Ley, sin afectar las partidas destinadas a inversiones.

Artículo 5º Además de las actuales Comisiones Constitucionales Permanentes de las Cámaras Legislativas, funcionará en cada Cámara una integrada por diez (10) miembros, con las siguientes funciones:

a) Conocer en primer debate de los proyectos de ley que creen, supriman o reformen establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales del Estado;

b) Estudiar los presupuestos de los establecimientos públicos y empresas comerciales o industriales del Estado y el funcionamiento de los mismos establecimientos y empresas; presentar al Congreso y al Gobierno informes en relación con ellos, formulando las observaciones a que haya lugar, y preparar los proyectos de ley que considere necesarios para la mejor marcha de esas entidades.

Con excepción de las Comisiones que en cada Cámara tienen a su cargo el estudio del Presupuesto Nacional, el personal de las demás se reducirá proporcionalmente para integrar la Octava, que se crea por esta Ley.

Artículo 6º Esta Ley regirá desde su sanción.

Dada en Bogotá, D. E., a los doce días del mes de diciembre de mil novecientos sesenta y siete.

El Presidente del honorable Senado,
GUILLERMO ANGULO GOMEZ

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
RAMIRO ANDRADE

El Secretario General del honorable Senado,
Amaury Guerrero

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,
Juan José Neira Forero

Republica de Colombia. — Gobierno Nacional.

Bogotá, D. E., diciembre 28 de 1967.

Publíquese y ejecútese.

CARLOS LLERAS RESTREPO

El Ministro de Gobierno,

Misael Pastrana Borrero

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Abdón Espinosa Valderrama

El Ministro de Defensa Nacional,

Gerardo Ayerbe Chauz

OBJECIONES

Bogotá, D. E., diciembre 20 de 1967.

Honorables Senadores y Representantes:

El señor doctor Ramiro Andrade, Presidente de la honorable Cámara de Representantes, ha enviado para la sanción ejecutiva el proyecto de ley "por la cual se crea la Intendencia Nacional del Putumayo y se dictan otras disposiciones", el cual fue aprobado por el Congreso en los debates reglamentarios. El proyecto en cuestión, además de elevar la Comisaría Especial del Putumayo a la categoría de Intendencia, dispone el aumento de las participaciones de los Departamentos, Intendencias, Comisarias y Municipios en los beneficios fiscales derivados de las explotaciones petrolíferas, la inversión de los mismos por parte de la nueva Intendencia, crea una Inspección de Trabajo y un Juzgado Municipal en Puerto Asís, ordena apropiaciones anuales en el Presupuesto Nacional con destino a las carreteras Pasto-San Francisco-Mocoa y Pitalito-Mocoa, establece en el artículo 9º un auxilio a favor de la nueva Intendencia por la cantidad de \$ 25.000.000 para la construcción "de acueducto y alcantarillado, fomento eléctrico, hospitales y puestos de salud, vías de penetración y carretables en zonas de colonización, turismo y educación".

El Gobierno Nacional comprende bien el interés de las regiones de ascender en la escala de la organización administrativa, a medida que el crecimiento de las mismas va satisfaciendo los requisitos de la Constitución y las leyes exigen para el aumento de su capacidad administrativa. Por esta circunstancia, es partidario de que la Comisaría del Putumayo, que está ofreciendo síntomas de positivo progreso por sus condiciones naturales y por el esfuerzo de sus habitantes, se eleve a la categoría de Intendencia, y por ello también ha presentado a las Cámaras Legislativas un proyecto de ley sobre fortalecimiento de los fiscos seccionales, que traslada a ellos rentas nacionales. Sin embargo, como participe en la tarea legislativa y en el estudio de la constitucionalidad de los proyectos de ley, no puede menos de llamar la atención, respetuosamente, del honorable Congreso de la República sobre los artículos 3º y 9º del proyecto de ley que ha recibido para sanción.

El aumento del 10% en las participaciones de los Departamentos, Municipios, Intendencias y Comisarias implica, obviamente, la disminución correlativa de las regalías que por este concepto percibe la Nación. Las regalías fueron incorporadas en el Presupuesto de la próxima vigencia por la Ley 45 de 1967 sin considerar la reducción que ahora se propone. Por su parte el artículo 210 de la Constitución dispone que en cada legislatura y estrictamente de acuerdo con la ley respectiva se expedirá el Presupuesto General de Rentas y Gastos y Ley de Apropriaciones. La Constitución le da carácter de ley superior a la orgánica del Presupuesto Nacional y en el artículo 120 del estatuto vigente sobre la materia (Decreto extraordinario 1675 de 1964), se lee: "Las rentas e ingresos incluidos en el Presupuesto no podrán ser cedidos en la respectiva vigencia, en su totalidad ni en parte, a favor de ninguna entidad de derecho público, mientras el Congreso no provea el recurso fiscal necesario para compensar el desequilibrio que ocasione en el Presupuesto, y mientras los nuevos recursos no se hayan incorporado a éste, las rentas e ingresos cedidos continuarán ingresando al Tesoro Nacional".

De otra parte, el artículo 9º del proyecto de ley comentado ordena auxilios anuales para la realización de programas de desarrollo en la Intendencia del Putumayo. De acuerdo con el numeral 20 del artículo 76 de la Constitución, el fomento de las empresas útiles o benéficas dignas de estímulo y apoyo debe hacerse con arreglo a los planes y programas que fijen las leyes respectivas. El Congreso Nacional expidió este año la Ley 11 en la cual se señalaron los requisitos a los cuales deben someterse los auxilios presupuestales de la Nación. En la medida en que en el proyecto de ley no se encuentran satisfechas dichas exigencias, el proyecto es violatorio de la condición constitucional prevista en el numeral 20 del artículo 76.

Con base en lo anterior y en ejercicio de las facultades que al Presidente de la República otorga el artículo 85 de la Constitución Nacional, muy comedidamente me permito objetar por inconstitucionales los artículos 3º y 9º del proyecto de ley que ha sido enviado para sanción ejecutiva.

Honorables Senadores y Representantes,

CARLOS LLERAS RESTREPO

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, Abdón Espinosa Valderrama.

LEY ... DE 1967

por la cual se crea la Intendencia Nacional del Putumayo y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1º Elévase la actual Comisaría Especial del Putumayo a la categoría de Intendencia, la que, por consiguiente, disfrutará en adelante de todas las prerrogativas y beneficios que a tales territorios corresponden.

Artículo 2º Los límites de la nueva Intendencia serán los mismos de la Comisaría Especial del Putumayo que por medio de esta ley se extingue y su capital será la ciudad de Mocoa.

Artículo 3º El artículo primero de la Ley 89 de 1959 se reforma así:

Las participaciones de los Departamentos, Intendencias, Comisarias y Municipios, en cuyos respectivos territorios se adelanten explotaciones petrolíferas, serán del 60% (sesenta por ciento) de las regalías, cánones o beneficios pagados al Estado por dichas explotaciones para los tres primeros y del diez por ciento (10%) para los últimos. Tales participaciones se considerarán como parte del patrimonio de aquellas entidades para los efectos del artículo 183 de la Constitución.

Los Departamentos, Intendencias, Comisarias y Municipios destinarán las participaciones de que trata el inciso anterior a obras públicas, educación e higiene, según las necesidades de dichas entidades.

Parágrafo. El diez por ciento (10%) de la participación que le corresponde al Departamento de Norte de Santander, en las explotaciones petrolíferas se destinará al Municipio de Chicuta para la construcción de su alcantarillado y cesará una vez terminada esta obra.

Artículo 4º El quince por ciento (15%) de la participación que le corresponde en explotaciones petrolíferas a la Intendencia del Putumayo se destinará para la construcción, reedificación, ampliación y pavimentación de la carretera Puerto Asís-Pasto-Túquerres-Tumaco y dejará de regir hasta la terminación total de esta vía, que se declara incorporada al Plan Vial Nacional.

Artículo 5º Créase una Inspección de Trabajo, con sede en Puerto Asís, para atender los asuntos originados en relaciones laborales en el territorio de la Intendencia.

Artículo 6º El Gobierno Nacional, por conducto del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, estudiará y ejecutará obras de desecación y parcelación en el valle de Sibundoy, conforme a las disposiciones vigentes sobre reforma agraria.

Artículo 7º La Intendencia del Putumayo elegirá sus Representantes a la Cámara, con sujeción a las normas constitucionales sobre la materia, y con base en los cálculos sobre población probable del Departamento Nacional de Estadística (DANE).

Artículo 8º Créase un Juzgado Promiscuo Municipal "C" en Puerto Asís.

Parágrafo. El personal y asignaciones de los funcionarios que habrán de servir al Juzgado que por este artículo se crea, serán los mismos que para los Juzgados de su categoría.

Artículo 9º Sin perjuicio de las apropiaciones presupuestales que conforme a la ley deben hacerse a favor de la nueva Intendencia, el Gobierno Nacional invertirá la cantidad de veinticinco millones de pesos (\$ 25.000.000) en la construcción de acueducto y alcantarillado, fomento eléctrico, hospitales y puestos de salud, vías de penetración y carretables en zonas de colonización, turismo y educación.

Parágrafo. El auxilio ordenado en el presente artículo, será incluido por el Gobierno en los Presupuestos de las próximas vigencias, a partir de la sanción de la presente ley, a razón de cinco millones de pesos (\$ 5.000.000) cada año, hasta completar el total de la partida.

Artículo 10. El Gobierno apropiará igualmente una suma no inferior a diez millones de pesos anuales en los presupuestos siguientes a la fecha de la sanción de esta ley, con destino a la carretera Pasto-San Francisco-Mocoa (nueva vía) hasta la terminación de la obra.

Artículo 11. El Gobierno apropiará en los Presupuestos siguientes a la fecha de la sanción de esta ley, una suma no inferior a diez millones de pesos (\$ 10.000.000) anuales para la construcción de la carretera Pitalito-Mocoa, hasta la terminación de la obra.

Artículo 12. Esta ley regirá desde su sanción.

Dada en Bogotá, D. E., a 30 de noviembre de 1967.

El Presidente del Senado,

GUILLERMO ANGULO

El Presidente de la Cámara de Representantes,

RAMIRO ANDRADE

El Secretario del Senado,

Amaury Guerrero

El Secretario de la Cámara de Representantes,

Luis Esparragoza Gálvez

MINISTERIO de HACIENDA y CREDITO PUBLICO

Se hacen unos contracréditos y se abren unos créditos

DECRETO NUMERO 2186 DE 1967

(noviembre 27)

por el cual se hacen unos contracréditos y se abren unos créditos adicionales al Presupuesto de Gastos para la vigencia fiscal de 1967 (Presidencia de la República), por \$ 205.682.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades legales, y

CONSIDERANDO:

Que por medio del ordinal b) del artículo 56 de la Ley 77 de 1966 y del parágrafo 1º del mismo artículo, se autorizó al Gobierno Nacional para abrir, mediante decreto, los créditos presupuestales necesarios para la buena marcha de la Administración Pública y el nuevo Plan de Inversiones del Gobierno, sin sujeción a las limitaciones impuestas por el Decreto-ley número 1675 de 1964;

Que por medio de la Resolución ejecutiva número 379 de 1967, se declararon sobrantes unos saldos de apropiación del presupuesto de gastos de la Presidencia de la República para la vigencia fiscal en curso, por carecer de compromiso, y en la misma providencia se propone la apertura de unos créditos adicionales, para incrementar varias apropiaciones que resultaron deficientes, y abrir otras para el pago de compromisos de vigencias expiradas, por un total de \$ 205.682;

Que para amparar la operación presupuestal de que se trata, el Contralor General de la República expidió el Certificado de Reserva y Disponibilidad número 68 de 1967, por valor de \$ 205.682, y

Que se han cumplido los requisitos legales para la tramitación de esta clase de negocios,

DECRETA:

Artículo 1º Hácense los siguientes contracréditos en el Presupuesto de Gastos para la vigencia fiscal de 1967: